

Santiago, cuatro de junio de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

Primero: Que en este juicio ordinario por terminación de contrato de prestación de servicios e indemnización de perjuicios, seguido ante el Juzgado de Letras y Garantía de la Unión bajo el Rol C-697-2020, caratulado “Aravena con Cooperativa Agrícola y Lechera de La Unión Limitada”, se ha ordenado dar cuenta de la admisibilidad de los recursos de casación en la forma y en el fondo deducidos por el demandante en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Valdivia, de fecha tres de noviembre de dos mil veintitrés, que confirmó el fallo de primer grado de veintiuno de abril de dos mil veintitrés, que rechazó la demanda, con costas.

EN CUANTO AL RECURSO DE CASACION EN LA FORMA:

Segundo: Que el recurrente esgrime, como primera causal de nulidad formal, la del artículo 768 N°4 del Código de Procedimiento Civil, dado que en el considerando segundo, el sentenciador se refiere a que las facturas -emanadas de la actora- no pueden ser consideradas como manifestación de voluntad de la demandada y no se acreditó que hayan sido pagadas. Estima que con aquello se configura la infracción ya que las partes nunca discutieron acerca de la voluntad expresada por la empresa demandada en relación a las facturas y mucho menos respecto a la veracidad de las facturas o su contenido o si fueron pagadas o no y destaca, además, que la contraria nunca objetó las referidas facturas.

Como segunda causal de nulidad formal el recurrente esgrime aquella contemplada en el artículo 768 N° 5 del Código de Procedimiento Civil en relación con el artículo 170 numerales 4° y 5° del mismo cuerpo normativo. Al respecto, señala que no se valoró por parte del tribunal toda la prueba acompañada. Estima que con su prueba documental y testimonial logró acreditar la existencia del contrato y que su parte sí dio cumplimiento al mismo.

Dado lo expuesto, pide que se invalide la sentencia y se dicte una de reemplazo que corresponda con arreglo a la ley, acogiendo en todas sus partes la demanda interpuesta, con costas.

Tercero: Que la causal formal invocada del artículo 768 N°4 del Código de Procedimiento Civil, no podrá prosperar por cuanto las circunstancias planteadas por el recurrente no la configuran. En efecto, cabe recordar que la doctrina comparada ve tanto en la ultrapetita –otorgar más allá de lo pedido- como en la extrapetita –extender la decisión a puntos no sometidos a conocimiento del tribunal- vicios que socavan un principio rector de la actividad procesal, cual es el de la congruencia. Y ese ataque se produce precisamente con la incongruencia, que en su acepción más simple y general es considerada como la falta de adecuación entre las pretensiones



de las partes, formuladas oportunamente y la parte dispositiva de la resolución judicial.

Luego, para dilucidar si en la especie en el fallo objetado, que confirmó la sentencia de primer grado, existe un desajuste entre lo resuelto y los términos en que las partes formularon sus pretensiones, corresponde primeramente proceder a comparar lo reclamado por los litigantes con lo resuelto en el fallo impugnado.

Dicho lo anterior, el examen aludido permite constatar que los jueces del fondo se han limitado a resolver sobre la base de las alegaciones formuladas por las partes, respecto de la procedencia de declarar terminado el contrato de prestación de servicios celebrado el 1 de octubre de 2019 entre las partes y de condenar a la demandada a pagar por concepto de indemnización de perjuicios, las sumas indicadas en el libelo. Al respecto, la demandada solicitó el rechazo de la demanda, siendo esta última pretensión la que, finalmente, fue acogida en el fallo que ahora se impugna.

Por consiguiente, el pronunciamiento censurado no se aleja de lo discutido en el proceso, resultando evidente que los sentenciadores han actuado dentro del ámbito de las atribuciones que les son propias, por habérselas otorgado los litigantes en sus escritos fundamentales, o, por el propio ordenamiento jurídico, sin que se hayan extendido a puntos no sometidos a su decisión ni excedido el marco legal que les correspondía examinar, de modo que el recurso de invalidez formal no podrá tener acogida.

Cuarto: Que respecto a la segunda causal invocada, cabe recordar que el artículo 769 del Código de Enjuiciamiento Civil, señala, en lo pertinente, que: “Para que pueda ser admitido el recurso de casación en la forma es indispensable que el que lo entabla haya reclamado de la falta, ejerciendo oportunamente y en todos sus grados los recursos establecidos por la ley”.

Así las cosas, del estudio de los antecedentes, se puede constatar que la sentencia de primera instancia sólo fue recurrida de apelación por la ejecutada, de manera que el recurso formal que se analiza no fue preparado en los términos que exige el artículo 769 del Código de Procedimiento Civil, pues el recurrente no impugnó oportunamente y en todos sus grados, mediante los recursos procesales pertinentes, el vicio que ahora reclama.

En consecuencia, el vicio denunciado no fue preparado, por lo que el recurso de invalidez formal tampoco podrá ser admitido por esta causal.

EN CUANTO AL RECURSO DE CASACION EN EL FONDO:

Quinto: Que en su arbitrio de nulidad sustancial el impugnante denuncia que en la sentencia recurrida se han infringido los artículos 128, 166, 171, 173, 175, 177, 179 del Código de Comercio, así como también el artículo 1702 en relación al artículo 1698



del Código Civil y 346 N°3 del Código de Procedimiento Civil y, por último, el artículo 1708 del Código Civil en relación con los artículos 1702,1712, 1713 del Código Civil, y 426 y 356 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y 1708 en relación al artículo 13 todas normas del Código Civil y los artículos 128, 173,175 y 177 del Código de Comercio.

Solicita se acoja el recurso, se anule la sentencia y se dicte una de reemplazo que revoque la sentencia de primer grado.

Sexto: Que el artículo 772 N° 1 del Código de Procedimiento Civil sujeta el recurso de casación en el fondo a un requisito indispensable para su admisibilidad, esto es, que el escrito en que se interpone exprese, es decir, explicita en qué consisten y cómo se han producido el, o los errores, siempre que estos sean de derecho.

Séptimo: Que, versando la contienda sobre un juicio ordinario de terminación de contrato de prestación de servicios en que el sentenciador decidió rechazar la acción por estimar que no pudo acreditarse la existencia del contrato, entre otros motivos, atendida la limitación de la prueba testimonial impuesta por el artículo 1709 del Código Civil. Así, la exigencia consignada en el motivo anterior obligaba al impugnante a denunciar la transgresión de aquellos preceptos que, al ser aplicados, sirven para resolver la cuestión controvertida. Sin embargo, el recurrente omitió extender la infracción al artículo 1709 del Código Civil, teniendo en consideración que éste forma parte de la normativa aplicada por los sentenciadores para resolver el fondo del asunto. Y al no hacerlo, genera un vacío que la Corte no puede subsanar, dado el carácter de derecho estricto que reviste el recurso de nulidad intentado, razón por la cual se rechazará.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en los artículos 781 y 782 del Código de Procedimiento Civil, **se declara inadmisibile** el recurso de casación en la forma y **se rechaza** el recurso de casación en el fondo, ambos interpuestos por el abogado Hernán Sandoval Jara, en representación del demandante, en contra de la sentencia de tres de noviembre de dos mil veintitrés dictada por la Corte de Apelaciones de Valdivia.

Regístrese y devuélvase, vía interconexión.

N° 247.077-2023

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema, integrada por los Ministros señor Juan Eduardo Fuentes B., señor Mauricio Silva C., señora María Soledad Melo L. y los Abogados Integrantes señor Raúl Patricio Fuentes M. y señor Carlos Urquieta S.

No obstante, haber concurrido a la cuenta de admisibilidad y al acuerdo, no firma el Abogado integrante señor Fuentes M., por ausencia.





En Santiago, a cuatro de junio de dos mil veinticuatro, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

